

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO**



**JUZGADO NOVENO DE FAMILIA DE BOGOTÁ EN ORALIDAD**  
Bogotá D.C., 27 de marzo de 2023

**Proceso Medida de protección (441-2022)**  
**Radicado 2022-00509**

A continuación, procede el despacho a desatar el recurso de apelación previo las siguientes,

**ANTECEDENTES**

El 16 de junio de 2022 la señora BLANCA LIRIA MEJIA a su favor y de su hijos, acudió a la Comisaría Quinta de Familia Usme I de esta ciudad, poniendo en conocimiento los hechos de violencia verbal del que es víctima por parte de ROBERTO PABON IBAÑEZ, donde luego de agotado el procedimiento de Ley, la Comisaría a quo, mediante providencia emitida del 11 de julio de 2022, se declaró probados los hechos de violencia intrafamiliar puesto en conocimiento.

El accionado interpuso el recurso de apelación señalando que *"dentro de del proceso existe el dictamen del médico psicólogo quien determinó y concluyó después de haber analizado al niño Juan Marcos que no existió eventos recientes de violencia intrafamiliar amenazas de muerte, relatados en la querella por la denunciante Blanca Liria Mejía y las demás pruebas como la trabajadora social hacen referencia a que el niño fue expuesto a evidenciar violencia intrafamiliar entre los padres mas no hacia él, de tal manera que no es procedente la medida de protección al menor porque ROBERTO PABON IBAÑEZ en ningún momento ha atentado contra la integridad de su hijo, en lo demás estoy de acuerdo a que se sometan a terapias tanto los padres como el menor para que superen los traumas que haya sufrido por haber observado estas conductas con base en lo antes dicho, no habiendo prueba para demostrar que existen riesgos contra el menor JUAN MARCOS MEJIA, solicito se revoque la medida de protección y se someta a los miembros de la familia a las terapias recomendadas en el fallo y se atienda la regulación de las visitas con las cuales también estoy de acuerdo con el fallo"*.

Concedida la apelación, corresponde a este estrado judicial decidir lo pertinente.

En esta instancia la accionante a través de su apoderado judicial manifestó que su representado se desconocieron de manera ostensible y arbitraria los derechos fundamentales del debido proceso, a la igualdad, a la honra, el honor la intimidad

y la propia imagen, establecidos en la Constitución Nacional y los principios generales y términos y procedimientos de la Ley, poniendo en peligro otros tantos que se derivan de aquellos. Estamos ante lo que jurídicamente se ha denominado una vía de hecho que afecta los derechos constitucionales fundamentales, que existe o se produce, cuando sucede alguno de los eventos relacionados por la Corte Constitucional en sus diversos pronunciamientos.

De igual manera, se hizo referencia que La Comisaria no cumplió con los deberes constitucionales y legales, ya que como se expresó y demostrará en el proceso, es notoria la omisión, la deficiencia, negligencia e ineficacia de los funcionarios públicos y judiciales para actuar, cuando toman medidas poco efectivas e ineficaces; incurren en desvío de poder.

Para efectos de probar los hechos materia de la denuncia, entre otras pruebas, su representado menciona que el dictamen del psicólogo sobre el joven JUAN MARCOS PABON MEJIA es el más verdadero, eficiente y eficaz quien concluyó que el joven actuaba por orientación parenteral en contra de su padre, sin que exista prueba que demuestre lo manifestado por su madre y todo obedece a el interés que tiene la señora para que mi representado pele con su hijo y justificar que no quiere que a él le corresponda parte del bien inmueble dentro del proceso que declaración y liquidación de la sociedad marital de hecho que lleva mi representado en el JUZGADO 5 DE FAMILIA DE BOGOTA, Radicado 110013110005-2020 -00355 -00. De tal manera que hay falla del servicio porque se demostró que no ha exigido ninguna conducta de mi representado ROBERTO PABON IBAÑEZ contra su hijo JUAN MARCOS PABON MEJIA y por lo tanto la decisión tomada en el Auto de 11 de julio de 2022, emitido por COMISARIA QUINTA DE FAMILIA DE USME II es una falla del servicio que debe ser corregida.

### **CONSIDERACIONES**

El artículo 4º de la ley 294 1.996, modificado por el artículo 1º de la ley 575 de 2.000, consagra: *"Toda persona que dentro de su contexto familiar sea víctima de daño físico o psíquico, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar, podrá pedir sin perjuicio de las denuncias penales a que hubiere lugar, al Comisario de Familia del lugar donde ocurrieren los hechos y a falta de este, al Juez Civil Municipal o Promiscuo Municipal, una medida de protección inmediata que ponga fin a la violencia, maltrato o agresión o evite que esta se realice cuando fuere inminente..."*.

El artículo 18 Ibídem prevé que contra la decisión definitiva sobre una medida de protección que tomen los Comisarios de Familia o los Jueces Civiles Municipales o Promiscuos Municipales, procederá en el efecto devolutivo, el recurso de apelación ante el Juez de Familia o Promiscuo de Familia.

El artículo 5º de la misma disposición contempla las medidas de protección y preceptúa: *"El funcionario podrá imponer, además, según el caso, las siguientes medidas: a) Ordenar al agresor el desalojo de la casa de habitación que comparte con la víctima, siempre que se hubiere probado que su presencia constituye una amenaza para la vida,*

*la integridad física o la salud de cualquiera de los miembros de la familia; b) Ordenar al agresor abstenerse de penetrar en cualquier lugar donde se encuentre la víctima, cuando a discreción del funcionario dicha limitación resulte necesaria para prevenir que aquel moleste, intimide, amenace o de cualquier otra forma interfiera con la víctima o con los menores, cuya custodia provisional le haya sido adjudicada; c) Prohibir al agresor esconder o trasladar de la residencia a los niños y personas discapacitadas en situación de indefensión miembros del grupo familiar, sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar; d) Obligación de acudir a un tratamiento reeducativo y terapéutico en una institución pública o privada que ofrezca tales servicios, a costa del agresor cuando éste ya tuviera antecedentes en materia de violencia intrafamiliar; e) Si fuere necesario, se ordenará al agresor el pago de los gastos médicos, psicológicos y psíquicos que requiera la víctima; f) Cuando la violencia o maltrato revista gravedad y se tema su repetición el Comisario ordenará una protección temporal especial de la víctima por parte de las autoridades de policía, tanto en su domicilio como en su lugar de trabajo, si lo tuviere; g) Cualquier otra medida necesaria para el cumplimiento de los propósitos de la presente ley.”.*

Para resolver el tema se debe tener en cuenta que los actos de violencia se presentan en dos formas, el primero de ellos mediante el maltrato físico, cuando se ocasionan lesiones en el cuerpo, por medio de: *"golpes, quemaduras, estrangulamiento, entre otros; produciendo fracturas, lesiones temporales o definitivas, llegando en algunos casos hasta la muerte"*, y, el segundo se manifiesta a razón del maltrato psicológico con *"actitudes de desprecio, control, burla, vigilancia de los actos del otro y la toma de decisiones importantes sin consultar a la familia"*<sup>[1]</sup>; los cuales, entendida su acepción más amplia, incluye todo género de acciones que afectan la dignidad humana de la víctima en todas y cada una de sus concreciones: respeto a la vida, integridad física y moral, libertad de locomoción y armonía síquica y emocional.

Por su parte, sostuvo la H. Corte Constitucional en Sentencia de Tutela No 967-14:

### ***"¿Qué es violencia doméstica o intrafamiliar?"***

*32. La violencia doméstica o intrafamiliar es aquella que se propicia por el daño físico, emocional, sexual, psicológico o económico que se causa entre los miembros de la familia y al interior de la unidad doméstica. Esta se puede dar por acción u omisión de cualquier miembro de la familia. (...)*

Según el tratadista AGUSTIN MARTINEZ PACHECHO, en cuanto al tema de violencia, citando a otros autores, en su obra LA VIOLENCIA: CONCEPTUALIZACIÓN Y ELEMENTOS PARA SU ESTUDIO, señala:

*Concepción restringida de la violencia.*

*Pese a que efectivamente no existe una definición de violencia ampliamente aceptada por los estudiosos, podemos encontrar algunas que han ofrecido un cierto consenso. Particularmente se encuentra en esta línea aquella que destaca el uso de la fuerza para causar daño a alguien. Elsa Blair<sup>1</sup> cita algunas de estas definiciones. Retomamos tres para iniciar el análisis. La primera la toma del investigador francés Jean Claude Chesnais,*

*quien dice: "La violencia en sentido estricto, la única violencia medible e incontestable es la violencia física. Es el ataque directo, corporal contra las personas. Ella reviste un triple carácter: brutal, exterior y doloroso. Lo que la define es el uso material de la fuerza, la rudeza voluntariamente cometida en detrimento de alguien".<sup>2</sup> Una segunda definición se encuentra en una cita que la autora realiza de Jean-Marie Domenach: "Yo llamaría violencia al uso de una fuerza abierta o escondida, con el fin de obtener de un individuo o un grupo eso que ellos no quieren consentir libremente".<sup>3</sup> La última definición la refiere del investigador Thomas Platt, quien habla de al menos siete acepciones del término violencia, dentro de las cuales la que menciona como más precisa es: "fuerza física empleada para causar daño".<sup>4</sup>*

En cuanto a la protección de los derechos del menor la H. Corte Constitucional en sentencia T-075 de 2013 M. P. NILSON PINILLA PINILLA señaló:

*"Los derechos de los menores de edad priman sobre los de los demás, por lo cual se ofrecen mayores garantías y beneficios, para proteger su formación y desarrollo. Igualmente, al ser los niños sujetos de protección constitucional reforzada, atraen de manera prioritaria las actuaciones oficiales y particulares que les concierna. Así, en todas las situaciones en que entren en conflicto los derechos e intereses de los niños y los de las demás personas, deberá dárseles prelación a aquéllos. Las autoridades administrativas y judiciales encargadas de determinar el contenido del interés superior de los niños en casos particulares, cuentan con un margen de discrecionalidad importante para evaluar, al aplicar la preceptiva atinente y ante las circunstancias fácticas de los menores de edad involucrados, la solución que mejor satisfaga dicho interés. Al tiempo, la definición de dichas pautas surgió de la necesidad de recordar los deberes constitucionales y legales que tienen las autoridades en relación con la preservación del bienestar integral de niños, niñas y adolescentes, que requieren su protección, lo cual obliga a jueces y servidores administrativos a aplicar un grado especial de diligencia y cuidado al momento de decidir, más tratándose de niños de corta edad, cuyo desarrollo puede verse afectado en forma definitiva e irremediable por cualquier decisión adversa a sus intereses y derechos."*

Igualmente, el maltrato comprende mucho más que el simple ejercicio de la violencia, aunque este aspecto será el más socorrido que el simple ejercicio en el orden efectual–probatorio, alcanzando toda una gama de comportamientos que denigran, desedifican, menosprecian, humillan, coartan o, sencillamente neutralizan el adecuado y libre desarrollo de la personalidad de la víctima, en el ámbito intrafamiliar.

Para probar la accionante el nexo causal entre dichos maltratos y la persona que las ocasionó, se recibieron los descargos de la accionante, los descargos del accionado, así como la entrevista e intervención psicológica realizada al menor JUAN MARCOS PABON MEJIA hijo de las partes (víctima), el testimonio de GLORIA INES OSPINA URREGO.

Analizadas la totalidad de las pruebas en forma individual y conjunta, se establece claramente que el apelante cometió actos de violencia intrafamiliar contra su hijo menor JUAN MARCOS PABON, tal como lo manifestó él mismo en las exposiciones ofrecidas en

la entrevista psicológica efectuada al interior del trámite adelantado por el aquo, donde el menor refirió que refirió que su padre lo violentó en varias ocasiones aunque no precisó el tipo de violencia ejercida sobre él, manifestó que fue por esa razón que tuvo que cambiarse de colegio, incluso manifestó que tuvo que decirle al rector del colegio que no quería que su papá fuera a visitarlo allí, porque sobornaba a sus compañeros para saber cosas de él, situación que el niño considera violencia psicológica, pues entiende que esas preguntas debe hacérselas a él y no a sus compañeros, indicó además que es su deseo que cuando compartan se centre en sus gustos e intereses y no en hablar de los conflictos que existen entre él y su progenitora relacionados con su custodia y el inmueble.

Al respecto la psicóloga de la comisaría A quo, conceptuó que existen conductas por parte del progenitor que podrían ser consideradas como forma de hostigamiento o acoso hacia el NNA JUAN MARCOS PABON, ya que el acercamiento del niño no se dan en circunstancias apropiadas o canales normativos adecuados, que podrían estar motivados por la necesidad del progenitor de tener contacto con el hijo ya que no lo puede hacer en otros espacios de manera formal, esta circunstancias estarían dando pie al desarrollo de conductas impulsivas por parte del señor ROBERTO PABON IBAÑEZ. Concluyendo entonces, que la conducta asumida por el progenitor genera incomodidad en el menor al sentirse hostigado por su padre, lo cual se encuadra en violencia psicológica.

Las anteriores pruebas son suficientes para determinar que la situación expuesta en la petición amerita la aplicación de medidas de protección, como acertadamente lo dispuso la Comisaría A quo, máxime si se trata de proteger los derechos de un menor.

Por lo anterior, se concluye que la Comisaría dio una correcta aplicación a la norma constitucional referente al interés superior del menor de autos atendiendo la situación de violencia generada por su progenitor, por lo que habrá lugar a confirmar la decisión impugnada, sin más consideraciones por no ser ellas necesarias, ante la claridad meridiana que brota de antes expuesto.

**En mérito de lo expuesto, el Juzgado Noveno de Familia de Bogotá D.C., administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,**

### **RESUELVE**

**PRIMERO: CONFIRMAR** la providencia del once (11) de julio de dos mil veintidós (2022) proferida por la Comisaría Quinta de Familia Usme II de esta ciudad.

**SEGUNDO: Notifíquese** esta decisión a las partes por el medio más expedito.

**TERCERO:** Devuélvanse las diligencias a la oficina de origen previa anotación de los libros radicadores.

**NOTIFÍQUESE**



**CESAR ENRIQUE OSORIO ORTIZ**  
**JUEZ**

VPR / ER

JUZGADO NOVENO (9) DE FAMILIA DE BOGOTÁ  
NOTIFICACIÓN POR ESTADO – SECRETARÍA

Bogotá D.C., **28 de Marzo de 2023**

El auto anterior queda notificado a las partes por  
anotación en el ESTADO No. 50

**ALISSON SANTAMARÍA CÁRDENAS**

Secretaria